

S.O.S Colombia ¡NOS ESTÁN MATANDO!

De acuerdo con el Informe del índice de Desarrollo Regional para América Latina (2020) Colombia es considerado el país más desigual de nuestra región. Hoy se enfrenta a una crisis económica en el que las comunidades más empobrecidas intentan sobrevivir en medio de desigualdades estructurales, a esto, se suma la crisis sanitaria por la pandemia del COVID 19 que ha desmejorado las condiciones de vida de estos sectores.

Actualmente el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) registra que para enero del 2021 se cuenta con una cifra de desempleo del 17,3% en el total nacional, lo que indica un aumento de 4,3 puntos porcentuales respecto a enero del 2020. Así mismo, el DANE registra que solo 2,2 millones de familias comen dos veces al día, 179.174 hogares se alimentan solo una vez y 23.701 a veces no tienen un plato diario. A esta precarización, se le agrega que la Defensoría del Pueblo denunció que los grupos armados han aprovechado que niños, niñas, adolescentes no tienen acceso a la educación virtual aumentando así en un 113% el reclutamiento forzado, sobre todo en las zonas rurales.

Pese a este panorama, el gobierno en cabeza de Iván Duque del partido Centro Democrático, invirtió 9.216 millones de dólares en gasto militar ocupando así el segundo lugar en América Latina con la inversión más alta en “seguridad y defensa” después de Brasil. Así mismo, desde el Ministerio de Hacienda se propuso una reforma tributaria bajo el eufemismo de “Ley de Solidaridad Sostenible” que tiene como propósito incrementar los impuestos a la canasta básica familiar, a los servicios públicos de los estratos 4, 5 y 6, establecer una disminución del monto mínimo a partir de la cual la ciudadanía debe declarar impuestos ante las autoridades, lo cual afectaría las rentas de trabajo de la clase media y no a las rentas de los empresarios. Esta medida se propuso con el fin de recaudar alrededor de 6.300 millones de dólares para pagar la deuda externa de la Nación.

Como respuesta a esta pretensión de profundizar la violencia estructural diversos sectores convocaron desde el 28 de abril del 2021 a paro nacional contra esta reforma tributaria, contra otras reformas que se pretenden hacer a la salud y a las pensiones de trabajadores. A estas manifestaciones se le han sumado principalmente movimientos de juventudes, pueblos indígenas, sectores campesinos, movimientos de mujeres, feministas, progresistas, sindicatos, docentes, conductores, estudiantes que le han agregado a este estallido social el mal manejo del gobierno a la crisis ocasionada por el covid 19, al

incremento de los asesinatos de líderes y lideresas sociales, a la implementación de políticas de muerte durante los últimos 20 años en Colombia.

Frente a estas legítimas manifestaciones el Estado colombiano ha respondido con represión policial, con militarización de los municipios y el uso de la violencia desmedida como estrategia de censura. Entre el 28 de abril y el 18 de mayo de 2021 la ONG Temblores registra 2.387 casos de violencia policial, de las cuales 51 son de violencia homicida presuntamente por parte de la policía, 1139 detenciones arbitrarias en contra de los y las manifestantes, 472 intervenciones violentas por parte de la fuerza pública, 33 víctimas de agresión en los ojos de marchantes, 146 casos de disparos de arma de fuego por parte de la policía y 27 víctimas de violencia sexual contra mujeres.

En relación a esta última cifra, hay un caso que muestra la represión y el abuso de poder por parte de las fuerzas armadas en Colombia. Según información proporcionada por la revista semana una joven habría sido abusada sexualmente por agentes antidisturbios del Esmad, luego de ser capturada durante una protesta en el marco del paro nacional y trasladada hacia una Unidad de Reacción Inmediata (URI) en la ciudad de Popayán, capital del Cauca. Al salir de ese lugar, la menor de 17 años se quitó la vida, por lo que las autoridades informaron de inmediato que el caso será priorizado por la Fiscalía y Medicina Legal con el objetivo de esclarecer los hechos, ante esta situación no sólo organizaciones sociales sino la población en general han mostrado su descontento y han pedido justicia para que lo sucedido con esta joven no quede en la impunidad.

Es importante resaltar que estos crímenes de Estado han sido en su mayoría contra adolescentes y jóvenes que están poniendo el cuerpo, su energía y la vida en las manifestaciones, tal fue el caso de Nicolás Guerrero un joven que cayó muerto a manos de las fuerzas policiales, y es que tal como lo detallo Semana, la identidad del joven fue confirmada por su mamá en redes sociales minutos después de que un video de sus últimos segundos de vida se hiciera viral en la madrugada. El joven, de 27 años, participaba de las protestas en el sector Paso del Comercio, norte de Cali, donde se realizaba una velación, luego los hechos son muy confusos: se escucharon disparos, se vio gente corriendo y Nicolás tendido sobre el pavimento bañado en sangre. Tenía un disparo en su cabeza.

Así como sucedió con estos dos jóvenes se han ido multiplicando los casos y la respuesta del gobierno de Iván Duque lejos de buscar un camino dialogado, de construcción colectiva y escucha al pueblo, ha mostrado una salida aún más violenta y represiva. Sin embargo el pueblo colombiano no ha cesado en su lucha y al contrario de doblegarse ante el miedo, se manifiesta en las calles y grita a una sola voz ¡NOS ESTÁN MATANDO!

Si bien este paro nacional ha logrado tumbar la reforma tributaria, la reforma a la salud, la renuncia del ministro de hacienda Alberto Carrasquilla, la no realización de la Copa América en Colombia y otras victorias más, el pueblo colombiano se mantiene en paro con distintas manifestaciones porque existe un descontento generalizado con las políticas de muerte, las desigualdades estructurales y la sistemática represión y violencia política que caracteriza a la sociedad colombiana.

Desde Colombia agradecemos al pueblo Argentino por su solidaridad en especial a la Universidad Nacional de Cuyo, extendemos este grito de denuncia para exigir el respeto por los derechos humanos, que estos crímenes de Estado no queden en impunidad como hasta ahora ha sucedido en el país, la implementación de los acuerdos de paz y así mismo la necesidad de desmontar el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD). Finalmente, rechazamos la propaganda de los medios de comunicación hegemónicos que criminalizan el derecho fundamental a la protesta social y estigmatizan a las personas que hemos decidido manifestarnos.

¡Hasta la vida siempre!

Lady Katherine Limas Ramírez

Lic. Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional, maestranda en Estudios Latinoamericanos de la UNCUYO. Trabaja para Área de Educación Popular de la Asociación Ecuménica De Cuyo.
kathelimram4@gmail.com

Lorena Mancera Panza

Lic. Sociología de la Universidad del Atlántico magíster en Estudios Latinoamericanos de la UNCUYO. Analista regional de jóvenes de Profamilia.
lormancera@gmail.com